



## GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

### Sentencia TFABA

**Número:**

**Referencia:** Corresponde expte nro 2360-0307250/19 -- "VERRACO S.A."

---

**AUTOS Y VISTOS:** el expediente número 2360-0307250 del año 2019, caratulado "VERRACO SA ACTA 87622" (cuando debió decir, VERRACO S.A.)

**Y CONSIDERANDO:** Que se elevan las actuaciones a este Tribunal (fojas 97), con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs. 88/95 por el Sr. Christian Hernán Campera, como Presidente de VERRACO S.A., con el patrocinio letrado del Cdor. Federico Ezequiel Emiliani contra Disposición Delegada SEATYS SMP N° 74, dictada el día 8 de febrero de 2021 por la Subgerencia de Coordinación Mar del Plata, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

A fojas 66/70 obra el citado acto, por el que la Autoridad de Aplicación sanciona a la firma del epígrafe y aplica una multa (art. 2º) equivalente a la suma de pesos ciento ochenta mil setecientos ochenta y tres (\$ 180.783), por haber incurrido en la infracción tipificada en el artículo 82 del Código Fiscal (t.o. 2011), en cuanto se constató el traslado de bienes dentro del territorio provincial sin el amparo de un C.O.T. y/o Remito Electrónico, infringiéndose las disposiciones del art. 41 del Código Fiscal, los arts. 16 y 21 de la D.N. Serie B N° 32/2006, sus modificatorias y el art. 621 de la D.N. Serie B N° 01/2004 y sus modificatorias (art. 1º).

A fojas 99 se adjudica la causa para su instrucción a la Vocalía de 6ta, Nominación a cargo del Cdor. Rodolfo Dámaso Crespi, haciéndose saber que conocerá en la misma la Sala II de este Tribunal integrada conjuntamente con la Vocal de 4ta Nominación, Dra. Laura Cristina Ceniceros, y el Vocal Subrogante de 5ta Nominación, el Dr. Ángel Carlos Carballal.

A fojas 107 se ordena correr traslado del recurso de apelación a la Representación Fiscal, obrando a fojas 111/115 el escrito de réplica.

A fs 116 se hace saber que la Sala II se encuentra integrada con el Cr Rodolfo Dámaso Crespi a cargo de la Vocalía de la 6ta nominación conjuntamente con el Dr Ángel Carlos Carballal en carácter de Vocal subrogante (conf. Ac. Ext. N° 100/22) y con el Dr Franco Osvaldo Luis Gambino en carácter de conjuer (conforme Acuerdo Ordinario N° 61/23, Acuerdo Extraordinario N° 102/22 y Acta N° 17/24). En la misma resolución se provee la prueba informativa ofrecida rechazándosela por resultar innecesaria para la resolución de la causa y se llaman autos para sentencia.

**Y CONSIDERANDO:** I.- Tras efectuar una síntesis de los antecedentes del caso, expone que la firma resultó adjudicataria de una licitación pública para la provisión de muebles a distintas sucursales del Banco Provincia, asumiendo el comprador la responsabilidad del acarreo de los bienes.

Alega que al momento del control por personal de ARBA, fue exhibido por el transportista un remito, emitido por el recurrente, con el detalle de la mercadería transportada. Destaca que el transporte es propiedad de la Sra. Daiana Solange Calloni y que la conducción estaba a cargo del Sr. Sebastián David Pivato. Reafirma que tales extremos han sido incluidos en el acta, por lo que la propiedad del automotor no es atribuible a VERRACO S.A., y que la carga resulta responsabilidad del destinatario.

Sostiene que la documentación exhibida se ajusta a las prescripciones de la Res. Gral. 1415 de la AFIP, lo que desecha toda suposición de evasión fiscal. Destaca que junto al descargo se agregó la factura comercial, en un todo de acuerdo con el remito exhibido al tiempo de la verificación, en dónde se acredita que el comprador resultó la institución bancaria aludida.

Cuestiona que, pese a la opción prevista en la norma, la Autoridad no haya optado por el decomiso de los bienes.

Agrega que el lugar donde se encuentra el establecimiento de la firma recurrente no cuenta con un sistema de comunicaciones de calidad. De allí, concluye que la falta de emisión del COT respondió a la imposibilidad de obtenerlo debido a la falta de operatividad del acceso telefónico e internet el día del despacho.

Aduce que se está en presencia de una conducta cuya levedad amerita la dispensa de la sanción, en tanto la documentación de respaldo que demuestra la instrumentación de la operatoria hace imposible la sospecha de evasión, habida cuenta que no se obstaculizó la tarea de control fiscal.

Señala que el acta contiene un error respecto al tipo legal en que se pretende encuadrar la conducta de la firma, dado que la falta del COT en todo caso representa un incumplimiento al art. 41 y no del art. 82 del Código Fiscal (T.O. 2011). Afirmar que ello constituye un defecto legal insoslayable. Agrega que no se ha infringido el art. 621 de la DN serie B 1/2004, por cuanto se acreditó la existencia de remito electrónico cuyo detalle se correspondía con exactitud con los bienes transportados.

Por otra parte, alega que la RN 26/2011 expresamente establece que cuando la ausencia de documentación no fuera total, la infracción debía ser sancionada conforme el art. 60 del Código Fiscal, por lo que la sanción impuesta bajo las previsiones del art. 82 de tal cuerpo, tampoco resulta aplicable. Entiende que se está en un supuesto de sanción más gravosa que la que habilita la norma legal y solicita su revocación en virtud del principio de ley penal más benigna.

Finalmente, pone de resalto el artículo 2 inc. 5 la D.N. 32/2006 contiene una eximente, no tenida en consideración por la verificación: cuando el propietario de la mercadería transportada sea, entre otros, un organismo público descentralizado o autárquico. De este modo, arguye que siendo que la propietaria de los bienes transportados el Banco Provincia de Buenos Aires (la entrega de la mercadería se despachó a su nombre y bajo responsabilidad del comprador-destinatario), no correspondía la emisión del COT. Por otra parte agrega que los bienes transportados se constituyen en bienes de uso para la institución bancaria, de forma tal que tampoco sería necesaria la emisión del COT, en virtud del inc. 6 del art. 2 de la DN mencionada en el párrafo anterior.

Invoca jurisprudencia y ofrece prueba, hace reserva del caso federal, y solicita finalmente que se revoque la sanción impuesta.

**II.-** A su turno, la Representación Fiscal se opone al progreso del recurso incoado señalando que el responde se efectúa sin tomar vista del expediente, en virtud de las medidas tomadas en el marco de la pandemia COVID19, limitándose las defensas a los agravios expuestos.

En forme previa, esgrime que se han reeditado los planteos formulados en la instancia previa de descargo, los cuales han sido refutados oportunamente, quedando demostrada su improcedencia.

Entrando al análisis de los agravios, recuerda los términos de los arts. 41 y 82 del Código Fiscal (T.O. 2011), así como también el art. 21 de la RN N° 32/06 y el art. 621 de la DN Serie B N° 01/04. Destaca que, conforme surge del acta, requerida que fuera la documentación, el conductor no exhibió ni informó COT, infringiendo toda la normativa antes apuntada.

Rechaza el agravio fundado en el supuesto error respecto del tipo legal en que se encuadra la conducta del sumariado, en tanto la misma cumple con todas las formalidades de la ley, y pone de resalto que el acta no fue redargüida de falsedad, ni rubricada en disconformidad. Cita jurisprudencia.

En respuesta al argumento de ausencia de infracción fundado en haber exhibido un remito como documentación de respaldo, afirma que, igualmente, la ley exige la emisión del Código de Operación de traslado o transporte. Explica que ello permite estimar el flujo físico de bienes en tránsito dentro de los límites territoriales, pudiendo así controlar y determinar con mayor eficacia el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los sujetos responsables; de manera que la falta de su diligenciamiento produce un perjuicio al Fisco Provincial. Cita jurisprudencia. Remata

que la sumariada debió entonces contar con la documentación requerida tanto por el régimen de la Resolución General 1415/03, como por el del art. 41 del Código Fiscal.

A su turno, indica que la mera invocación del carácter de bien de uso, por sí, no resulta suficiente, ya que es necesario que tal carácter haya sido debidamente consignado en el comprobante de conformidad con lo exigido por la Res. Gral. 1415/03.

Postula que no resulta necesario el análisis de la existencia de intención alguna por parte del infractor para la configuración de la infracción, y cita jurisprudencia. En cuanto a la irrazonabilidad y desproporción de la multa, remarca que el acto expresa que la sanción ha sido graduada teniendo en consideración las pautas del art. 7 del decreto 325/97, encontrándose dentro de la escala legal, más cercana al mínimo previsto. Asimismo, sostiene que constituyen extremos que deben ser necesariamente acreditados.

Concluye que los agravios traídos deben ser rechazados, y solicita se confirme la resolución apelada.

**III.- Voto del Cr Rodolfo Dámaso Crespi:** Que, tal como ha quedado delineada la controversia en la presente instancia, corresponde establecer si –en función de los agravios incoados por la parte apelante– la Disposición Delegada SEATYS SMP Nº 74, dictada el día 8 de febrero de 2021 por la Subgerencia de Coordinación Mar del Plata de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, se ajusta a derecho.

Así, de manera preliminar debo señalar que, frente al planteo de la Representación Fiscal direccionado –evidentemente– a poner en tela de juicio el cumplimiento por parte de la recurrente del recaudo formal establecido en el artículo 120 del Código Fiscal vigente, vinculado a la suficiencia técnica de los agravios expresados por esta, advierto que si bien las defensas en cuestión pueden resultar similares a aquellas formuladas en la instancia administrativa de descargo contra la resolución de inicio (máxime, si han sido rechazadas en esa instancia), en el caso, las opuestas mediante el recurso en tratamiento se dirigen clara y precisamente a controvertir la disposición apelada ante este Tribunal (y los fundamentos que sustentan en definitiva la sanción aplicada). Conforme lo expuesto, corresponde tener por satisfecha la señalada carga procedimental, lo que así declaro.

En punto al argumento vinculado a que el acta de comprobación posee un error que origina un defecto legal insoslayable al no indicarse correctamente cuál ha sido la conducta pasible de sanción y la normativa en que se basa la misma, adelanto su rechazo.

En primer lugar, cabe señalar que el artículo 128 del Código Fiscal (T.O 2011), dispone que la procedencia de la nulidad del acto se origina por la ausencia de los requisitos (formales y sustanciales) contemplados de forma detallada por los artículos 70 y 114. Dichas condiciones que debe presentar el acto sancionatorio, resultan ineludibles y esenciales para que sea considerado válido y eficaz y que cause los efectos jurídicos propios.

En el caso, si bien no se menciona expresamente el art. 41, se ha identificado la imputación realizada y referenciado la normativa que da sustento a la sanción establecida (art 82), así como se ha dado justificación, explicación de la pretensión fiscal con ponderación de los elementos existentes en el expediente, tanto los recabados por el Fisco como los adjuntados con el descargo por la firma de marras. Es claro, entonces, que no puede reconocerse vicio o desmedro alguno en el proceder fiscal o en el contenido del acto que afecte o derive en desmedro de la defensa del imputado.

Asimismo, se ha llevado adelante el procedimiento normativo previsto, habiendo el administrado presentado su descargo –con sus respectivas defensas- y el Fisco analizado el mismo, con lo cual no es posible calificarlo de arbitrario.

En ese sentido, se ha expuesto que las nulidades procesales requieren un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés formal del cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (CSJN Fallos 311:2337 entre otros).

En síntesis, se advierte del contenido del acta de comprobación que la misma posee los elementos básicos que permiten tener por configurada la infracción que ha servido de antecedente y fundamento del acto apelado ya que en ella se imputa la ausencia de COT -y se reitera que aunque no se mencione expresamente al art. 41, se remite claramente al artículo 82 y ss. del Código Fiscal (t.o. 2011 y modif.) el cual resulta aplicable ante dicha infracción y se deja constancia de la restante normativa incumplida -art. 16 D.N. Serie B N° 32/06 (sus complementarias y modificatorias) y art. 621 de la D.N. Serie B N°1/2004).

En conclusión no se advierte la existencia de un vicio que amerite la declaración de nulidad, lo que así declaro.

Sentado ello, corresponde analizar la conducta de la firma de marras y examinar los agravios de fondo esbozados por la recurrente. En tal sentido, cabe traer a colación que la infracción a los deberes formales atribuida a la firma del epígrafe deviene del control de la “Mercadería en tránsito” llevado a cabo por el Fisco en la Ruta 226 Km 64,5, de la ciudad de Balcarce, Provincia de Buenos Aires, a efectos de verificar que el transporte de la mercadería o bienes conste del respaldo documental correspondiente.

A fojas 3 obra el Acta de Comprobación, emitida el día 5 de julio de 2019, por la que se deja constancia de que los fiscalizadores intervinientes procedieron a interceptar un vehículo marca Ford, modelo Cargo 1517, dominio GQG657, de propiedad de la Sra. Diana Solange Calloni, conducido por el Sr. Sebastián David Pivato.

Que consultado el chofer, informa que transporta mercadería de propiedad de la firma VERRACO S.A., desde el domicilio sito en la calle Caminito N° 950 de la localidad de General Rodríguez,

hasta el domicilio sito en la calle San Martín N 1370 de la ciudad de Necochea, ambos de la Provincia de Buenos Aires, para ser entregada al Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo que, al requerir la documentación de respaldo de los bienes transportados, exhibe un remito - R N°0001-00003286-, emitido con fecha 4 de julio de 2019 por la firma VERRACO SA. Agrega que no posee Remito Electrónico ni C.O.T., incurriendo por ello en la infracción del art. 16 D.N. Serie B N° 32/06 (sus complementarias y modificatorias), art. 621 de la D.N. Serie B N° 1/2004 y artículo 82 y ss. del Código Fiscal (t.o. 2011 y modif.).

Luego, el inspector interviniente efectuó una inspección ocular del camión y realizó el inventario (se trataba de 55 artículos de muebles de oficina), cotejando que el valor de la mercadería transportada ascendía a un valor total de pesos un millón doscientos quince mil doscientos cincuenta y cinco con setenta y ocho centavos (\$ 1.215.255,78).

La ausencia del COT derivó en que ARBA sancionara a la firma, con una multa de PESOS CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES (\$ 180.783).

Es dable señalar que en el Título X del Código Fiscal, el citado Art. 82 (según Ley 14.983 - vigente a la fecha de comisión de la infracción imputada), dispone en lo que aquí interesa que *“Serán objeto de decomiso los bienes cuyo traslado o transporte, dentro del territorio provincial, se realice en ausencia total de la documentación respaldatoria que corresponda, en la forma y condiciones que exija la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91. En aquellos supuestos en los cuales la ausencia de documentación no fuera total, la Autoridad de Aplicación podrá optar entre aplicar la sanción de decomiso o una multa de entre el quince por ciento (15%) y hasta el treinta por ciento (30%) del valor de los bienes transportados, aunque en ningún caso podrá ser inferior a la suma de pesos un mil quinientos (\$3.000)...”*. Es decir, que contrariamente a lo alegado en el recurso, el encuadre legal elegido como fundamento de derecho en el art. 82 del Código Fiscal, luce ajustado a derecho.

Por otra parte, en los supuestos de ausencia parcial de documentación exigible, la norma habilita una opción en punto a la sanción posible: decomiso o multa. Tal elección, huelga advertir, orbita dentro de las facultades discrecionales de la Administración actuante. En el caso bajo estudio, la elección efectuada a favor de la sanción de multa se presenta como el ejercicio razonable de aquellas. De manera tal, que los agravios mediante los cuales se cuestiona a la Autoridad no haber optado por decomisar los bienes en cuestión, resultan una mera disconformidad respecto el criterio administrativo, sin aportarse elemento fehaciente alguno que permita vislumbrar arbitrariedad en dicha actuación. Por tal motivo, la queja no es receptada.

Pues bien, tal como surge del acto apelado, para completar el marco jurídico que regula la conducta aquí analizada, debe también recordarse que el art. 41 de Código Fiscal (T.O. 2011), establece: ***“El traslado o transporte de bienes en el territorio provincial deberá encontrarse amparado por un código de operación de traslado o transporte, cualquiera fuese el origen y***

**destino de los bienes.** El referido código deberá ser obtenido por los sujetos obligados a emitir los comprobantes que respaldan el traslado y entrega de bienes, o por el propietario o poseedor de los bienes, en forma gratuita, previo al traslado o transporte por el territorio provincial, mediante el procedimiento y en las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación. Quienes realicen el traslado o transporte de los bienes deberán exhibir e informar ante cada requerimiento de la Autoridad de Aplicación, el código de operación de traslado o transporte que ampara el tránsito de los mismos. **El incumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo por parte del propietario de la mercadería será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Título X de este Código.** Los demás supuestos serán reprimidos de conformidad a lo establecido en el artículo 60 del presente” (el resaltado me pertenece).

Frente a ello, la apelante sostiene entre sus agravios la improcedencia de la multa aplicada en tanto se habría exhibido un remito que se ajusta a las prescripciones de la Res. Gral. 1415 de la AFIP, tornando innecesario la emisión del C.O.T., cuya omisión de su diligenciamiento expresamente reconoce.

Sobre el tema, debe destacarse que la exigencia legal de la emisión del Código de Operaciones de traslado o transporte (COT) se encuentra establecido para una mejor fiscalización y control, pues coadyuva a contar con el detalle de cada operación de transporte de bienes realizada en el territorio provincial. Resulta entonces, un deber formal que permite controlar y determinar con mayor eficacia el cumplimiento de las obligaciones fiscales involucradas. Ergo, el mero amparo de la mercadería a través de un remito físico, no exime al contribuyente de cumplir con la obligación legal. El agravio, en consecuencia, no es de acogida.

En lo tocante a los defectos técnicos del servicio de telefonía y la dificultad en el acceso a internet, cabe traer a colación lo expuesto por el juez administrativo en el acto en crisis (fojas 52), al explicar que “...consultada la Base de Datos de la Agencia se verificó el Reporte de Incidentes que luce a fs. 49 que no existió interrupción en el servicio en la fecha del acto”.

En este contexto, debe ponerse de resalto que la parte recurrente no ha ofrecido prueba alguna para demostrar y fundar la imposibilidad o dificultad alegada en la fecha en que fue llevado adelante el procedimiento de control (5 de julio de 2019). En definitiva no se acreditan las circunstancias fácticas que el recurso enuncia en términos genéricos. Por ello, frente a estas consideraciones es que corresponde rechazar la defensa intentada, lo que así declaro.

A su turno, con relación al planteo de que el adquirente de la mercadería en tránsito era el Banco Provincia de Buenos Aires, y por lo tanto, no resultaba exigible la emisión del C.O.T. (según el art. 2 inc. 5 de la Disposición Normativa Serie B N°32/2006), se advierte que la factura correspondiente fue emitida con fecha 6 de julio de 2019 - Factura N°0010-0000020 agregada en la etapa de descargo-, por lo que, en la instancia en que se efectuó la verificación en cuestión, no se había llevada a cabo la tradición de los bienes. Ergo, la entidad bancaria no había asumido el rol de propietario de las mercancías.

Por otra parte, acorde a las constancias de la causa y las propias manifestaciones del apelante, VERRACO SA era el responsable de la gestión del transporte de los muebles al sostener que: *“El Banco de la Provincia, adquirente de los productos, no cuenta con un medio propio para el retiro de la mercadería vendida por lo cual el aquí apelante debió ordenar el acarreo del mobiliario en un transporte a cargo del destinatario, despachando el mismo desde su planta fabril el día 05-07-2019, con tiempo suficiente para su arribo y entrega”* (ver fs. 90). Fácil se advierte, entonces, que la gestión del flete asumida, incluía el cumplimiento de las obligaciones formales accesorias al transporte, en el caso, la tramitación del C.O.T. o remito electrónico que impone la Provincia de Buenos Aires con fines de verificación. Por tal motivo, este agravio tampoco puede prosperar.

En punto a la posible condición de bienes de uso de la mercadería transportada, debo recordar que, para que no resulte necesario la emisión del C.O.T. bajo estudio, es indispensable que tal carácter haya sido debidamente consignado en los comprobantes (exigencia prevista en el art. 2 inc. 7 de la DN Serie B N° 32/06); circunstancia que no se corrobora en el caso de marras.

En consecuencia, evalúo que la imputación fiscal luce ajustada a derecho, habida cuenta de que se corrobora el efectivo transporte de bienes desprovisto de la debida documentación de respaldo, cuya ausencia ha sido evaluada por el legislador como un hecho lesivo del bien jurídico tutelado. Por consiguiente, resulta claro que se verifican los extremos necesarios para configurarse la infracción tipificada en el art. 82 del Código Fiscal, por lo que corresponde confirmar la sanción allí prevista en el quantum establecido, lo que así declaro.

**POR ELLO, VOTO:** 1°) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 88/95 por el Sr. Christian Hernán Campera, como Presidente de VERRACO S.A., con el patrocinio letrado del Cdor. Federico Ezequiel Emiliani contra Disposición Delegada SEATYS SMP N° 74, dictada el día 8 de febrero de 2021 por la Subgerencia de Coordinación Mar del Plata, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 2°) Confirmar el acto apelado en todo su alcance y contenido. Regístrese, notifíquese a las partes y al Señor Fiscal de Estado.

**Voto del Dr Ángel Carlos Carballal:** Adhiero al voto del Cr Rodolfo Dámaso Crespi.

**Voto del Dr Franco Osvaldo Luis Gambino:** Adhiero al voto del Cr Rodolfo Dámaso Crespi.

**POR ELLO, SE RESUELVE:** 1°) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 88/95 por el Sr. Christian Hernán Campera, como Presidente de VERRACO S.A., con el patrocinio letrado del Cdor. Federico Ezequiel Emiliani contra Disposición Delegada SEATYS SMP N° 74, dictada el día 8 de febrero de 2021 por la Subgerencia de Coordinación Mar del Plata, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 2°) Confirmar el acto apelado en todo su alcance y contenido. Regístrese, notifíquese a las partes y al Señor Fiscal de Estado.





**GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

**Providencia**

**Número:**

**Referencia:** Corresponde al Expte N°2360-307250/19 "VERRACO S.A ."

---

Se deja constancia que la sentencia dictada bajo GEDO INLEG-2024-34142523-GDEBA-TFA, ha sido firmada conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Extraordinario N° 96/20 y registrada en esta Sala II bajo el N° 3553 .-